



PROGRAMA DOCTORADO
Cuestiones Actuales del Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas

Trabajo de investigación realizado en el curso
Acompañamiento académico para la investigación

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONTROL CONSTITUCIONAL EN NICARAGUA

Autor(a): FABIO DAVID SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Tutor Académico: DR. OMAR GARCÍA PALACIOS

Agosto, 2016

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Programa de Doctorado “Cuestiones actuales del Derecho”



**ORIGEN Y EVOLUCION DEL CONTROL
CONSTITUCIONAL EN NICARAGUA**

Artículo de investigación presentado por:

FABIO DAVID SÁNCHEZ GONZÁLEZ

2016

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Programa de Doctorado “Cuestiones actuales del Derecho”



**ORIGEN Y EVOLUCION DEL CONTROL
CONSTITUCIONAL EN NICARAGUA**

Artículo de investigación presentado por:

FABIO DAVID SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Tutor académico:

DR. OMAR GARCÍA PALACIOS

Managua, Nicaragua, 4 de agosto 2016

RESUMEN

En el presente artículo se procedió hacer un estudio histórico científico de la regulación constitucional sobre el control constitucional que ha regido nuestro país, para determinar el origen del mismo en nuestro sistema positivo; así como analizar sus diferentes influencias doctrinales y la evolución que ha tenido en el transcurso de la historia constitucional nicaragüense. Este estudio inicia desde que Nicaragua pertenecía al imperio español como territorio parte de una de sus provincias, posteriormente después de su independencia en su etapa de estado federado y consecutivamente como estado libre, soberano e independiente. Se analizaron, por su carácter histórico e influyente en el derecho constitucional nicaragüense, la sentencia del caso Marbury vs Madison de 1803 como la precursora de la justicia constitucional en el continente americano, las constituciones de Bayona y Cádiz que rigieron España en la etapa de pre independencia; así como las 2 constituciones de la Federación Centroamericana en su etapa post independencia y las 10 constituciones, incluyendo las 3 Non Nata que han regido a Nicaragua como de estado independiente desde 1838 hasta 2016.

PALABRAS CLAVES

Control Constitucional / Historia / Evolución / Nicaragua

ABSTRACT

In this article we proceeded to make a scientific historical study of the constitution regulation on constitutional control that governed our country, to determine its origin in our positive system; and analyze their different influences and doctrinal evolution that has taken over the course of the Nicaraguan constitutional history. This study starts from that Nicaragua belonged to the Spanish empire territory as part of a provinces, then after independence in their stage of federal state and consecutively as an independent free stage, sovereign. Were analyzed for their historic and influential in the Nicaraguan constitutional right character, the decision in Marbury vs. Madison in 1803 as the forerunner of constitutional justice in the Americas, the constitutions of Bayonne and Cadiz who ruled Spain in the pre independence; and 2 constitutions of the Central American Federation in its post-independence stage and 10 constitutions, including 3 Non Nata that have governed Nicaragua as independent state from 1838 to 2016.

KEY WORDS

Constitutional Control / History / Evolution / Nicaragua

TABLA DE CONTENIDO

Introducción. 1. Periodo Pre Independencia 1.1. Sentencia Marbury vs Madison (1803). 1.2. La Constitución de Bayona 1807. 1.3. Constitución de Cádiz 1812. **2. Periodo Federación Centroamericana de 1824 a 1838.** 2.1. Constitución Federal

1824. 2.2. Constitución Federal 1826. **3. Periodo Constitucional de 1838 a 1893.** 3.1. Constitución 1838. 3.2. Constitución de 1848 (Non Nata). 3.3. Constitución de 1854 (Segunda Non Nata). 3.4. Constitución de 1858. **4. Periodo Constitucional de 1893 a 1939.** 4.1 Constitución de 1893. 4.2 Constitución 1905 4.3 Constitución de 1911(Tercera Non Nata). 4.4 Constitución 1911. **5. Periodo Constitucional de 1939 a 1979.** 5.1. Constitución de 1939. 5.2. Constitución de 1948. 5.3. Constitución de 1950. 5.4. Constitución de 1974. **6. Periodo Constitucional de 1979 a 2016.** 6.1. Constitución de 1987. **Resultados y Aportes. Lista de Referencias.**

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de la República establece que Nicaragua es un “Estado Democrático y Social de Derecho”; lo cual implica que el Estado se basa en el acatamiento del Derecho, el que crea un sistema donde una norma suprema, la cual se denomina Constitución, rige en primer lugar el ordenamiento jurídico del Estado. Al ser Nicaragua un Estado Social de Derecho, deja implícito el principio de legalidad, como la sumisión del Estado al ordenamiento jurídico, estableciendo la supremacía constitucional a través del control constitucional.

El control constitucional que rige nuestro país, ha venido evolucionando a través de la historia, influenciado por las diversas corrientes doctrinales, que lo han venido nutriendo para irlo perfeccionando en su principal objetivo, de ser el instrumento jurídico de control para mantener la supremacía de la Constitución sobre las otras normas de un rango inferior del ordenamiento jurídico.

El presente artículo tiene un carácter histórico científico; ya que estudia el origen y la evolución del control constitucional en Nicaragua, desde lo que podemos llamar su nacimiento en la historia americana, como sus raíces europeas hasta la incorporación en la norma suprema del país; a través de las diversas constituciones y la forma en que se ha dictado y ejercido por los diversos órganos facultados para el control de los mismos; con el objetivo de estudiar cómo se ha perfeccionado el mismo a través de la historia de ser un control constitucional que nace como garante de libertades individuales, lo que se podrá observar como el antecedente del habeas corpus en los cuadros del presente artículo, hasta que se transforma en ser un guardián de la misma

constitución y de pasar de ser ejercido por un órgano político como es el poder legislativo, a ser ejercido por un órgano apolítico de administración de justicia como es el poder judicial; para luego convertirse en un procedimiento jurídico donde establecen los criterios para preservar la supremacía constitucional de la norma superior que rige nuestro país.

Para este objetivo se ha clasificado la historia constitucional de Nicaragua por periodos en orden cronológico del tiempo de la legislación que gobernó nuestro territorio; ya que cada uno de estos, ha marcado una tendencia de control de la norma suprema de acuerdo al tiempo y las situaciones que la historia de nuestro país ha vivido de acuerdo a su contexto político e influencia doctrinal. Se toma como inicio el periodo de pre independencia, señalado el inicio del control constitucional con la Sentencia Marbury vs Madison en el continente americano, que se emite por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803, la cual es considerada como la precursora en el inicio de la justicia constitucional en nuestro continente, luego se analiza la influencia francesa en las Constituciones de Bayona y Cádiz de España que nos gobernaron en la etapa pre independencia, que también fueron fuentes de influencia doctrinal en las Constituciones Federales para finalmente concluir con las Constituciones de Nicaragua que la han regido como república, libre, soberana e independiente desde 1838 hasta el 2016.

1. PERIODO PRE INDEPENDENCIA

1.1 Sentencia Marbury vs Madison (1803)

Nicaragua en los inicios del siglo XIX estaba bajo la demarcación territorial y administrativa de la Capitanía General de Guatemala, integrante del Imperio de la Corona Española y regida por sus leyes hasta su independencia en el año 1821. En el inicio del siglo XIX, existe un caso trascendental meritorio de referirnos y es la Sentencia Marbury vs Madison en año 1803; la cual marcaría una tendencia que cambiaría la historia del derecho constitucional, no solo en los Estados Unidos de América donde se produjo, sino que influenciaría el modo de aplicación del control

constitucional en el continente americano y en otros continentes. Su trascendencia tocaría las posturas del derecho constitucional de esa época, proyectándola a lo que muchos autores en la materia han llamado “el nacimiento de la justicia constitucional”. En nuestro criterio, también marca “el nacimiento del control constitucional en la competencia del poder judicial”; como un mecanismo que fortalece la separación de poderes de la que refiere el Barón de Montesquieu en su obra “Teoría de la Separación de Poderes del año 1748” y García Palacios (2015, p. 9) refiere que

Esta teoría se convierte en el paradigma del Estado Constitucional. El planteamiento de Montesquieu apoyó de modo complementario al de Locke. La teoría de la división de poderes gira en torno a la idea de garantía de la libertad cuya premisa fundamental consiste en evitar a toda costa el abuso del poder.

La sentencia en mención generó una nueva tendencia en la historia del derecho constitucional en nuestro continente y por ende, su influencia repercutió en el constitucionalismo nicaragüense, al ser influenciado nuestro derecho por las corrientes ideológicas de las diversas tendencias políticas que nos gobernaron en la historia de nuestro país.

En los Estados Unidos, en el año 1803, el Tribunal Supremo, dicta la sentencia en el Caso Marbury vs Madison, cuyo relator fue el ilustre magistrado John Marshall, en la cual emite una sentencia en la que establece la inaplicabilidad de una ley dictada por el Congreso de los Estados Unidos (sección décima tercera de la Ley de 1789 que organizaba el Poder Judicial) por oponerse esta a lo que establece la Constitución de ese país. Esta sentencia histórica, como lo referí anteriormente, marca el inicio del control constitucional por parte del poder judicial en las actuaciones de los órganos generadores de legislación y el actuar administrativo; dejando establecido la potestad de que al judicial se le faculte de mantener la supremacía constitucional de las leyes.

Señala sobre esta sentencia Carbonell (2000, p. 1)

Que el caso Marbury no se refiere a una cuestión de derechos fundamentales, sino más bien a una de las posibles vías para garantizar – para hacer efectiva- la Constitución. Es decir, Marbury trata de un asunto de teoría general de la Constitución (la supremacía constitucional) y de teoría de derecho procesal constitucional (el papel de los jueces ante las leyes inconstitucionales).

Si bien en cierto, en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, no establecía como se defendería lo expresado en la misma en cuando a derechos fundamentales, ni humanos, ni que órgano debería protegerla; ésta sentencia establece la vía como señala Carbonell para garantizar el control mismo que viene hacer la Suprema Corte. De acuerdo con Andrade (2003, p. 274)

la Suprema Corte era un poder más al lado del Ejecutivo y el Legislativo y se encontraba obligada a admitir cualquier ley propuesta por el legislativo; pero que Marshall hizo sentir que la Suprema Corte norteamericana, no solo era igual en rango y categoría, sino que era la guardiana de la constitucionalidad ante los otros dos poderes, quienes así la reconocieron después del célebre caso Marbury vs. Madison.

En un cierto modo de reflexión, retomando a Andrade ésta sentencia convirtió al Poder Judicial, en un fiel garante de tomar las riendas del control constitucional y darle una mayor importancia sobre los otros poderes de la época.

Históricamente refiere Escobar Fornos (2005, p. 9) sobre esta sentencia que:

El caso Marbury vs. Madison se produce en un momento de sucesión presidencial. Después de la victoria del antifederalista Jefferson en 1801, el presidente saliente Adams, federalista, aprovechó los últimos momentos para nombrar jueces inamovibles de tendencia federalista. En forma precipitada nominó a William Marbury, pero el nombramiento no llegó a tiempo a su destinatario. El nuevo ministro de Jefferson, Madison, se opuso al nombramiento, y Marbury recurrió al Tribunal Supremo para que obligara a la administración a discernirle el cargo de acuerdo con la Ley Judicial de 1789. John Marshall, federalista, nombrado por el presidente federalista Adams, declara inconstitucional la ley de 1789 y, como consecuencia, rehúsa examinar la demanda de Marbury, aunque éste conserva su derecho de demandar al ministro ante los tribunales la reparación pertinente. Marshall con mucha habilidad

sacrifica al federalista Marbury en su nombramiento, pero establece el principio del control judicial de la constitucionalidad de las leyes que reforzaba el poder federal, de lo cual no se dieron cuenta los antifederalistas por la embriaguez del triunfo al rechazarse el nombramiento de Marbury.

Andrade (2000, p. 277 y 278) expresa que el Juez Marshall concluye con su formidable proposición relativa a las Constituciones escritas:

“Ciertamente, todos aquellos que han adoptado Constituciones escritas, las consideran como la ley suprema y fundamental de la nación y, en consecuencia, la teoría de los gobiernos de esta naturaleza, tiene que ser que un acto de la Legislatura que contradiga la Constitución, es nulo. Esta teoría esta esencialmente vinculada a las Constituciones escritas, y consecuentemente, debe ser considerada por esta Corte como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad”.

Por lo que el Juez Marshall deja establecido el principio de supremacía constitucional en esta sentencia histórica y la acción de Corte Suprema de los Estados Unidos, al ser garante del resguardo de la misma, es la quien aplica el control constitucional. A mi criterio la influencia del control constitucional que emana de esta sentencia, va a ser transcendental en la historia constitucional de Nicaragua, el cual como se dijo anteriormente ha sido influenciado por varias corrientes ideológicas políticas y doctrinales de derecho, pero muy particularmente se puede observar la incorporación de lo que dejó establecido esta sentencia cuarenta cinco años después en la Constitución de 1848, tal y como se verá más adelante en relación a que el ejercicio del control constitucional será incorporado al poder judicial; al dejar establecido el control constitucional de la norma suprema que rige el país en el Poder Judicial, manteniendo de esta forma una distribución más equitativa del Poder, de acuerdo a la doctrina de la distribución de poderes de Montesquieu.

1.2. Constitución de Bayona 1808

Es importante retomar la influencia de la Constitución de Bayona en nuestro derecho constitucional, ya que fue la primera constitución que rigió España y las provincias españolas de América y Asia; por ende, fue la primera constitución que rigió el territorio de Nicaragua antes de independizarse del imperio español. Esta constitución tiene la característica de inclinación de la ideología liberal de la época, por el aporte y el sentimiento de la revolución

francesa impregnado por Napoleón con un matiz autoritario; ya que se da en un contexto histórico de la invasión francesa en España en 1807 cuando el Rey de España, Manuel Godoy y Napoleón firman el tratado de Fontainebleau con la finalidad de aislar a Inglaterra y repartirse el territorio de Portugal. Que posteriormente culmina en la renuncia obligada de Carlos IV, Rey de España y su Hijo Fernando VII, heredero del trono, y ceden el trono juntos a sus colonias, al Imperio Napoleónico.

Refiere el historiador Esgueva Gómez (2000, p.6) que en 1808 Napoleón invadió España e impuso a su hermano José Bonaparte como rey. En su tiempo se promulgó la “Constitución de Bayona” de 1808, legitimando tal autoridad. Así mismo comenta Escobar Fornos, I (2012, p. 167)

Napoleón dota a España de la primera Constitución moderna a España, la cual causó rechazo, pues fue impuesta en contra de la voluntad del pueblo español y en América de igual forma provoco rechazo y protesta. En la Capitanía General de Guatemala las autoridades declararon que no se reconocían los actos de Bayona y juraron fidelidad al Rey de España.

En el análisis jurídico, en cuando a los derechos y libertades de esta Constitución que realiza Castro y Calderón (2007, p. 9) señala que:

No presenta un capítulo destinado a los derechos y libertades, ya que se encuentran dispersos en el texto constitucional, entre ellos podemos mencionar que: el Senado velaba por la conservación de la libertad individual y la libertad de imprenta (Artículo 39), existía el control constitucional para garantizar la libertad individual, a través de un procedimiento de Hábeas Corpus (Artículo 40 y siguientes), así como una Junta de cinco senadores, Junta Senatorial que velaba por la libertad de imprenta (Artículo 45 y siguientes).

En esta constitución se encuentra un mecanismo de control de derechos y libertades constitucionales como lo señala acertadamente Castro y Calderón por parte del órgano legislativo, en este caso el Senado, como textualmente refiere el artículo 39 “Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de imprenta, luego que esta última se establezca por ley”. Pero no cabe duda que en ésta constitución aparecen los indicios de los derechos de la libertad individual y de lo que

conocemos actualmente como el recurso de habeas corpus, más específicamente de manera procedimental en el artículo 43 que establece: “Si después de tres requisiciones consecutivas hechas en el espacio de un mes, la persona detenida no fuese puesta en libertad, o remitida a los tribunales ordinarios, ajunta pedirá que se convoque al Senado, el cual si hay méritos para ello, hará la siguiente declaración: Hay vehementes presunciones de que no está detenido arbitrariamente”. La misma constitución en el artículo 133 establecía que toda detención que no esté expresamente autorizada por la ley era considerada un delito.

Estas disposiciones de garantes de la libertad individual y la libertad de imprenta, van hacer un gran avance en la evolución del control de derechos y libertades constitucionales establecidas en una constitución, que por primera vez regía nuestros territorios. Sí bien es cierto, este tipo de control que se establece bajo el resguardo de la función del Senado como garante de los mismos; es el primer mecanismo de accionar que tendría una persona, cuando se tendría o existía una violación a lo que establezca la carta magna en cuanto a libertades individuales y de imprenta. Pero aun ésta constitución carece o no establece un mecanismo de control cuando existe una transgresión a la norma suprema por una norma de menor rango. En esta época de nuestra historia existe una línea en cuanto a derechos que aún no se había desarrollado o no se tomó en cuenta, porque ya se maneja doctrinalmente en esa época, la jurisprudencia que sentó el Juez Marshall que trascendió el continente.

1. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de Bayona de 1808

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Libertad Individual	Artículo 40.- Una junta de de cinco senadores nombrados por el mismo Senado, conocerá en virtud de parte que le da el Ministro de la Policía general de las prisiones ejecutadas con arreglo al artículo 134 del título XIII, cuando las personas presas no han sido puestas en libertad, o entregadas a disposición de los Tribunales dentro de un mes de su

	prisión. Esta Junta se llamará Junta Senatoria de Libertad Individual.
Libertad de Imprenta	Artículo 45.- Una Junta de cinco senadores nombrados por el mismo Senado, tendrá el encargo de velar sobre la libertad de imprenta. Los papeles periódicos no se comprenderán en la disposición de este artículo. Esta junta se llamará Junta Senatoria de Libertad de Imprenta.

1.3 *Constitución de Cádiz de 1812*

La Constitución de Cádiz de 1812, es reconocida como la primera constitución española que es dictada por el pueblo español, ya que los españoles rechazaron la Constitución de Bayona y el nombramiento del hermano de Napoleón, José Bonaparte como Rey de España. La cual también nos rigió en la etapa pre independencia por ser Nicaragua territorio provincial de España. Es meritorio señalar que en el artículo 10 de ésta carta magna, señalaba como parte del territorio español lo que hoy se conoce como Nicaragua que formaba parte de la provincia de Guatemala como se señaló anteriormente.

Señala Esgueva Gómez (2003, p.27)

el origen de la Constitución de Cádiz, como una etapa de rebeldía del pueblo español: En su rebeldía los representantes de las diferentes juntas de la península y de las colonias extracontinentales, como Filipina y América, se reunieron en cortes, reconociendo la soberanía de la nacional española y promulgaron la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 que influyó marcadamente en la independencia de América y de Centroamérica.

En la publicación de la Asamblea Nacional (2012, p.8) con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, menciona en referencia a dicha Constitución que:

Fue jurada en América, y su legado es notorio en la mayor parte de las repúblicas que se independizaron entre 1820 y 1830, sirvió como modelo constitucional, fue pensada, ideada y redactada por representantes americanos como un proyecto global hispánico y revolucionario. En las Cortes Generales había sesenta parlamentarios americanos de México, Ecuador y Perú, que luego se convirtieron en influyentes forjadores de las constituciones nacionales de sus respectivas repúblicas.

En el ámbito de las influencias en nuestro derecho refiere García Palacios (2015, p. 85)

La Constitución Cádiz tiene un tratamiento en materia de derechos que toma como punto de partida los dos grandes derechos básicos del constitucionalismo: la libertad (libertad civil en los términos de la Constitución) y la propiedad. Además, reconoce los “derechos legítimos de todos los individuos que la componen” (Artículo 4). Regulación sobre los derechos de nacionalidad, el sufragio con sus respectivos matices productos del momento histórico en que se regula, tratamiento de derechos en materia penal, por ejemplo, el debido proceso y las garantías penales (principio de legalidad), tratamiento de derechos de privacidad (inviolabilidad del domicilio, correspondencia, no confiscación de bienes), derechos de educación (instrucción pública –primeras letras y universidades y otros establecimientos de instrucción Artículos 366 y 367). La obligación de explicar la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. Las Cortes tienen la competencia para regular los planes de instrucción pública; derechos de libertad de pensamiento, imprenta con limitaciones establecidas por ley.

Sobre esta Constitución que fue promulgada el 19 de marzo de 1812, Escobar Fornos (2012, p.169) señala que

No existe un capítulo destinado a los derechos y libertades, pero se encuentran dispersos en el texto. Señalaremos algunas instituciones, derechos y libertades de corte liberal: a) El control constitucional del cumplimiento de la libertad individual y de imprenta le corresponde a un órgano político como es el Senado, mediante dos juntas: Una junta compuesta de cinco senadores denominada Junta Senatorial de Libertad Individual, encargada de velar por la conservación de esta libertad, para lo cual se establece un

procedimiento de habeas corpus. La otra junta de cinco senadores, denominada Junta Senatorial de Libertad de Imprenta, la cual protege la libertad de imprenta. b) La inviolabilidad del domicilio. c) La libertad de industria, comercio y cultivo. d) La supresión de los privilegios comerciales. e) La igualdad de las colonias con la metrópoli. f) La supresión de las aduanas internas. g) La disminución de fideicomisos, mayorazgos y sustituciones. h) La igualdad en el sistema de contribuciones. i) La prohibición de exigir la calidad de nobleza para los empleos civiles, militares y eclesiásticos. j) Queda abolido el tormento y todo rigor no autorizado por la ley en la detención y ejecución de un delito. k) El proceso criminal es público y se dispone que en las primeras Cortes se tratará de si se establece o no el proceso por jurado.

En esta Constitución, se encuentran instaurados los derechos innatos del hombre como ser humano; indudablemente hay una cierta influencia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789. Muestra de esto es lo que establece en su artículo 4 el que refiere que la nación estaba obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. En cuanto al Control Constitucional está constitución señalaba en el Capítulo X: De la Diputación Permanente de Cortes; la cual estaba compuesta puesta de siete individuos de su seno, tres de provincias de Europa y tres de la de Ultramar, y el séptimo saldría por suerte de un diputado de Europa y otro de Ultramar; establecía en su artículo 160, de las facultades de la Diputación en su numeral primero la de: “Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes para dar cuenta a las próximas Cortes de las infracciones que haya notado”.

Así mismo, el título décimo que define la observancia de la Constitución, y modo de proceder para hacer variaciones en ella, establecía en el Capítulo Único en su artículo 372 que

“las Cortes en sus primeras sesiones tomaran en consideración las infracciones de la Constitución, que le hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ellas”.

Refiere García Palacios (2015, p.87)

que la observancia de este artículo es competencia de las Cortes el cumplimiento de la misma (idea de control de constitucionalidad de tipo político o parlamentario no jurisdiccional... “Se puede afirmar que existen elementos de rigidez constitucional y por ende, una idea de supremacía constitucional, aunque quizás vinculada, a la supremacía en sentido formal, Artículo 375-384”.

Considero que las Cortes, según los derechos consagrados en esta Constitución tenían una funcionalidad amplia al representar la voluntad popular, vigilar el cumplimiento de la Constitución y reformarla; por lo que ejercían el autocontrol constitucional en la plenitud de sus derechos parlamentarios o políticos como refiere García Palacios.

2. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de Cádiz 1812

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Libertad de escribir, imprimir y publicar.	Artículo 371.- Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.
Mecanismos de Control:	Artículo 372.- Las Cortes en sus primeras sesiones tomaran en consideración las infracciones de la Constitución, que se les hubiere hecho presentes, para poner el conveniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella.

2. Período Federación Centroamérica 1821 a 1838

2.1 Constitución Federal de 1824

El 15 de Septiembre de 1821, en el Palacio de la Capitanía General de la Ciudad de Guatemala, se proclamó el Acta de Independencia de Centroamérica. Posteriormente el General Iturbide es proclamado Emperador de México e invade a las provincias centroamericanas y son obligadas a firmar el Acta de Anexión al Gobierno Mexicano el 5 de enero de 1822, quien fue combatido en Centroamérica y en México por los republicanos lograr derrotado en una Asamblea Constituyente el 31 de marzo de 1823. Don Vicente Filísola, Jefe Político de Centroamérica el 29 de marzo de 1823 convoca aun Congreso de Diputados de las Provincias de Centroamérica que luego se constituyó en la Asamblea Nacional Constituyente y elaboró la Constitución Federal del 24 de noviembre del 1824.

Álvarez Lejarza (1936, p. 46) menciona que el Congreso:

Echó los cimientos de la nueva nación, fijo la igualdad de los hombres, la división de poderes públicos, la libertad de imprenta sin límites, la tolerancia religiosa, la manumisión de los esclavos, la abolición de la esclavitud, leyes de colonización, aranceles de comercio y franquicias.

También Esgueva Gómez (2005, p. 2) señala

"Uno de los primeros pasos de esta República Federal o Federación Centroamericana fue promulgar su constitución en 1824. Esa Magna Ley demarcaba el territorio federal; mencionaba los estados que la componían; defendía la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; e insistía en el concepto de ciudadanía y en los derechos de los ciudadanos para elegir las autoridades de los respectivos poderes. Ya, en el prólogo, expresaba su pretensión de afianzar los derechos del hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad", a la vez que deseaba "establecer el orden público y formar una perfecta federación".

Esta Constitución Centroamericana fue de ciertamente inspirada por la Constitución de los Estados Unidos de 1787, tomando como modelo el sistema de gobierno federal. Refiere García Laguardia (1987, p. 23)

“En la fundación de la República Centroamericana, la influencia de la Constitución Americana es expresa. Nuestra primera Constitución – la de 1825- se inspiró, su parte orgánica, en la norteamericana y también en el joven constitucionalismo español, el de la Constitución de Cádiz”.

A mi criterio la Constitución de la 1824 en el ámbito de derecho constitucional es un poco más avanzada de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, ya que establecida el principio de supremacía constitucional y quien debía mantenerlo como guardián de la misma e indudablemente la se ve marcada también la influencia de la Constitución de Cádiz en cuanto a derechos del inalienables. Según Chamorro Mora (1984, p. 33)

señalando las características principales de la misma, la señala de la siguiente manera: “Como principio esencial y primer objeto de la soberanía consagra la conservación de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad. La forma de Gobierno estaba señalada como popular, representativa y federal con división de poderes; el legislativo federal, el ejecutivo y el judicial, todos integrados por personas electas popularmente en forma indirecta”.

En el artículo 174 establece que: “Ninguna Ley del Congreso ni de las Asambleas pueden contrariar las garantías contenidas en este título; pero sí ampliarlas y dar otras nuevas”. Estableciendo así la supremacía constitucional; así mismo esta constitución adjudicaba la atribución al Poder Judicial, el cual residía en la Corte Suprema de Justicia, según la Sección 2. De las Atribuciones de la Suprema Corte Suprema de Justicia en su artículo 136 de “Conocer en última instancia con las limitaciones y arreglo que hiciere el Congreso en los casos emanados de la Constitución, de las leyes generales, de los tratados hecho por la República, de jurisdicción marítima y de competencia sobre jurisdicción en controversias de ciudadanos o habitantes de diferentes Estados. Por la tendencia de la influencia norteamericana en esta Constitución, vemos como el control constitucional se le atribuye al poder judicial, estableciendo claramente las ideas liberales de la distribución de poderes y notoriamente se ve marcada la jurisprudencia del caso expuesto por el Juez Marshall; en quizás la mejor intención de los parlamentarios al redactar una Constitución muy

similar a la idea del Estado federal norteamericano, pero mejorando los mecanismos de control y aplicación del mismo en la distribución equitativa de poderes.

3. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución Federal 1824

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 136.- Conocerá en última instancia con las limitaciones y arreglo que hiciere el Congreso en los casos emanados – de la Constitución- de las leyes generales – de los tratados hechos por la República – de la jurisdicción marítima y de competencia sobre la jurisdicción en controversias de ciudadanos o habitantes de diferentes Estados.
Libertad Individual	<p>Artículo 155.- Nadie puede ser preso sino en virtud de orden escrita de autoridad competente para darla.</p> <p>Artículo 157.- Pueden ser detenidos: 1ro. El delincuente cuya fuga se tema con fundamento. “do. EL que sea encontrado en el acto de delinquir; y en este caso todos pueden aprehenderlo para llevarle al Juez.</p> <p>Artículo 158.- La detención de que habla el artículo anterior no podrá durar más de cuarenta y ocho horas, y durante este término deberá la autoridad que la haya ordenado practicar lo prevenido en el artículo 156 y librar por escrito la orden de prisión; o poner en libertad al detenido.</p>
Supremacía Constitucional	Artículo 221.- Esta Constitución aun antes de sancionarse regirá en toda fuerza y vigor como la Ley Fundamental desde el día de su publicación, mientras otra no fuera sancionada.

2.2 Constitución Federal de 1826

La Constitución Federal de la República de Centroamérica de 1824 ordenaba la elaboración de una Constitución para cada Estado que se encontraba dentro de la Federación. En 1826 Nicaragua cumplió con este mandato y elaboró la Constitución Política del Estado de Nicaragua en su calidad de miembro de la Federación según refiere García Palacios (2015, p. 88).

Según Castro y Calderón (2007, p. 20)

El Estado de Nicaragua fue el último en promulgar su Constitución debido a los conflictos bélicos (guerra civil) que desde 1824 convulsionaba gran parte del territorio. La primera elección popular en Nicaragua se llevó a cabo el 8 de abril de 1825, y se conformó la primera Asamblea Constituyente del Estado de Nicaragua. El 26 de abril de 1826 se promulgó la Constitución del Estado de Nicaragua la cual era una copia de la Constitución Federal de 1824.

Esgueva Gómez (2000, p. 179) señala

la Constitución desde su inicio dejaba clara la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano: libertad, igualdad, seguridad y propiedad; así mismo refiere que en la misma, la Ley estaba por encima de cualquier funcionario (Artículo 8). La principal ley era la Constitución, que regulaba a las propias autoridades y éstas no podían pasar los límites fijados en ella (Art 12). La ley, la Constitución, debía proteger la vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad de los habitantes del estado (Artículo 37) y debía ser igual para todos, ya premiara, ya castigara (Artículo 38). Una ley que fuera contra los derechos de los nicaragüenses sería in-justa y por tanto no sería ley (Artículo 39). Debía estar, pues, al servicio de los derechos y no los derechos al servicio de ella. La hacía la Asamblea y para ser válida, necesitaba la sanción del consejo representativo, salvo algunas excepciones, y la promulgaba el ejecutivo (Artículo 82-92).

El artículo 163 de la Constitución Federal de 1826 señala

La Asamblea en sus primeras sesiones tomará en consideración las infracciones de la Constitución y leyes que se le hagan presentes, para poner el conveniente remedio, y hacer

efectiva la responsabilidad de los contraventores, dictando al efecto las providencias, que parezcan conducentes.

En esta Constitución se otorga al parlamento la facultad del control constitucional y establece el que tomará en consideración las infracciones a la misma y leyes que se hagan presentes, para poner el remedio y hacer la efectiva responsabilidad de los contraventores. Por lo que cambia el sistema de control constitucional con referente a la primera constitución federal que se le otorgaba al poder judicial y en ésta Constitución se le atribuye el mismo al parlamento, generando una figura del auto control parlamentario.

4. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución Federal 1826

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 163.- La Asamblea en sus primeras sesiones tomará en consideración las infracciones de la Constitución y leyes que se le hagan presentes, para poner el conveniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de los contraventores, dictando al efecto las providencias, que parezcan conducentes.
Supremacía Constitucional	Artículo 164.- Todas las leyes que hasta aquí han regido, continuarán en su vigor y fuerza, sino son las que se opongan a la Constitución de la República y del Estado, y a las que han sido dadas por las legislaturas nacionales y del mismo Estado.

3 Periodo Constitucional de 1838 a 1893

3.1. Constitución de 1838

El 30 de mayo de 1838 el Congreso Federal dio un golpe a la federación al declarar libres a todos los Estados para constituirse como quisieran sin otra restricción que la de conservar la forma de gobierno popular representativa. El 30 de abril, Nicaragua proclamó su independencia absoluta, que fue promulgada el 13 de noviembre de 1838. La Constitución se firmó el 12 de noviembre, refiere Lejarza (1936).

Es la primera Constitución de Nicaragua como un Estado Independiente de la Federación Centroamericana y se promulga como un Estado Libre, Soberano e Independiente. En la cual se establecía un régimen republicano, popular y representativo.

Refiere Esgueva Gómez (2000, p. 210) en cuanto a los derechos que consagra esta Constitución que

Eran derechos del nicaragüense la libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Estos eran inenajenables e imprescriptibles (Artículo 25). El derecho a la libertad excluía el poder venderse o ser vendido (Art.26). Destacaban también el ser protegido por la ley (Artículo 27); el poder libremente comunicar sus pensamientos de palabra, por escritura o imprenta, sin previa censura, aunque sin abusar de esta libertad (Artículo 29); el que se respetaran las opiniones de los demás (Artículo 30) el no impedirse la movilización interna o externa (Artículo 32); el no poder ser detenido arbitrariamente (Artículo 34); el ser respetado su vivienda, como asilo sagrado (Artículo 33); el derecho a no ser proscrito (Artículo 39); el no poder ser confiscado (Artículo 40); el tener igualdad de oportunidades y ser admitido a los empleos públicos, son distinciones sociales.

El control constitucional para garantizar la supremacía y normativa de la misma, lo establece en el artículo 193 y se le otorga a las Cámaras; las cuales tomarán en consideración las infracciones de la Constitución y leyes que se les hagan presentes, para poner el conveniente remedio, tomar conocimiento de las que hayan cometido los otros poderes, y excitar a los tribunales competentes, para que se haga efectiva la responsabilidad de los demás funcionarios. En esta Constitución no se señala las facultades del Poder Judicial de ejercer el control constitucional; por lo que se continúa

con el modelo de control parlamentario de la Constitución de Federal de 1826 siguiendo la línea doctrinal de la Constitución de Cádiz.

5. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución Federal de 1826

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 193.- Las Cámaras en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución y leyes que se les hagan presentes, para poner el conveniente remedio, tomas conocimientos de las que hayan cometidos los otros poderes, y excitar a los tribunales competentes para que se haga efectiva la responsabilidad de los demás funcionarios.
Supremacía Constitucional	Artículo 197.- Todas las leyes que hasta aquí han regido, continuaran en su vigor y fuerza, a menos que se opongan a la presente Constitución, o a las leyes secundarias que se dieran en adelante. Que abolida la Constitución de emitida el ocho de abril de mil ochocientos veintiséis.

3.2. Constitución de 1848 (Non Nata)

El Supremo Director, José León Sandoval, presentó ante la Asamblea un proyecto de Reformas Constitucionales, ambas cámaras decretaron una revisión total de la Constitución, lo cual conllevó a instaurarse la Asamblea Constituyente en la Ciudad de Managua el 3 de Septiembre de ese mismo año. En la nueva Constitución se sustituía el nombre de Supremo Director por el de Presidente quedando el jefe del Ejército subordinado a él, lo cual el general Trinidad Muñoz no estaba dispuesto a ceder el mando militar ni a ponerlo en manos del Presidente; lo que conllevó a presiones a algunos diputados y el proyecto no se promulgo. Esto ocasionó que a esta

Constitución se le conociera como “Non Nata” según refiere Castro y Calderón (2007, p.26).

Esgueva Gómez (2000, p. 263) refiere que

en esta constitución hay una cierta restricción de derechos de la ciudadanía; ya que en el artículo 8 expresaba que eran ciudadanos los varones casados o mayores de veintiún años con una propiedad raíz o capital en giro en el valor que determine la ley y que supieran leer y escribir; lo cual es discriminatorio y crea una sociedad de ciudadanos élités.

Este proyecto de constitución establecía derechos de los ciudadanos como reunirse pacíficamente para tratar sobre política, o examinar la conducta pública de los funcionarios; lo cual es un poco restrictivo señalar el objeto de las reuniones de las cuales son permitidas. Así mismo se establecía la inviolabilidad del domicilio, derecho al sufragio, entre otros. En cuanto al control constitucional de esta constitución refiere Ruiz Guerrero (1987, p. 207) que en:

Un intento de ahondar en la necesaria protección de la Constitución frente al Legislador y al Ejecutivo se observa en el proyecto de Constitución de 1848 –no promulgada, ya que la minoría parlamentaria impidió obtener el quórum necesario para su aprobación– que preveía en su Artículo 74.9, como facultad de la Suprema Corte, «observar ante el Poder Legislativo las providencias que en forma de ley, ordenanza, orden o resolución haya emitido contra la Constitución; y las que el Ejecutivo decreta sin facultades o en oposición a las leyes. Y cuando las secciones dentro de nueve meses de su recibo, se pongan de acuerdo con la inconstitucionalidad o i legalidad, de la providencia legislativa o ejecutiva, prevendrán a los jueces que no hagan aplicación de ella, hasta que la inmediata legislatura resuelva lo conveniente».

A mi criterio esta constitución da una evolución constitucional interesante al darle las facultades de ejercicio del control constitucional a la Corte Suprema; indudablemente existe una notada influencia de la Sentencia del Caso Marbury vs Madison en nuestro derecho constitucional. Pero en cuanto a los derechos individuales hay un cierto atraso, ya que lo que se había avanzado en las otras Constituciones se pierde al ser discriminatoria y restrictiva según lo referido con anterioridad.

6. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1848

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 74.- Facultades del Poder Judicial. Inciso 9.- Observar ante el Poder Legislativo las providencias que en forma de ley, ordenanzas, orden o resolución hayan emitido contra la Constitución; y las que el Ejecutivo decrete sin facultades o en oposición a las leyes. Y cuando las secciones dentro de nueve meses de su recibo, se pongan de acuerdo con la con la inconstitucionalidad o ilegalidad, de la providencia legislativa o ejecutiva, prevendrán a los Jueces que no hagan aplicación de ella, hasta que la inmediata legislatura resuelva lo conveniente.

3.3. Constitución de 1854 (*Segunda Non Nata*)

La Constitución de 1854 fue la segunda constitución Non Nata en nuestra historia Constitucional. En el discurso de Don Fruto Chamorro que da por inaugurado la Asamblea Constituyente manifiesta que querría cambiar las garantías para el honrado, no para el perverso; para el respetando los derechos sociales, tienda por el orden; y no para el que atentando contra ellos, ande a carga de revuelta y trastornos. Por lo que este proyecto de Constitución mermaba estas garantías y permitía el allanamiento de las casas, la ocupación o registro de la correspondencia epistolar, el arresto o la prisión de las personas refiere Esgueva Gómez (2000, p. 265).

Señala Ruiz Guerrero (1987, p. 207) que:

El proyecto de Constitución de 1854 –no promulgada tampoco, debido a la Guerra Civil, que devino en la Guerra Nacional de 1856– establece en su Artículo 89 la prohibición de

aplicar otras leyes que las que estén conforme a la Constitución, disposición orientada a los tribunales de justicia con el propósito de garantizar la supremacía constitucional.

De esta manera se pretendía dejar establecido el Control Constitucional al Poder Judicial; es importante señalar que el artículo 89 establece que los tribunales y jueces no podrán otras leyes que las que estén conforme a la Constitución, lo que mantiene la línea del proyecto de la primera Constitución; al dejar establecido esta facultad al Poder Judicial.

7. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1854

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 89.- Los tribunales y jueces no podrán ejercer otras funciones que las expresamente detalladas por la Constitución y leyes, y la de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Tampoco podrán aplicar otras leyes que las que están conforme a la Constitución, abrir juicios fenecidos, avocar causas pendiente, sino es para el efecto de ver, ni formar reglamentos para la ejecución y aplicación de las leyes.

3.4. Constitución de 1858

La Constitución se promulgó el 19 de agosto de 1858, cuando era Presidente Tomás Martínez, siendo de tendencia política conservadora. Esta Constitución se produce en el período que va de 1858, conocido como los “Treinta Años Conservadores”, años de gran estabilidad económica, política y social de nuestro país. Señala Castro y Calderón (2007, p. 29).

García Palacios (2015, p. 88) señala que esta Constitución es la más larga de la historia constitucional nicaragüense y estuvo vigente 35 años.

Refiere Esgueva Gómez (2000, p. 268)

que la Constitución de 1858 era una copia, con breves cambios, de los proyectos de los años 1848 y 1854. A pesar de que ella se expresaba que en Nicaragua no había clase privilegiada, ni títulos, ni vinculaciones, ni destinos velante ni hereditarios; era una Constitución que favorecía a la clase privilegiada y cerraba las puertas a la gran mayoría de los nicaragüense para ocupar los puestos más importantes. El dinero y los bienes raíces no eran comunes ni similares a todos los nicaragüenses y, en consecuencia, lo puestos tampoco.

En esta Constitución se omiten los mecanismos del Control Constitucional. Señala Ruiz Guerrero (1987, p. 208) que

no se pretende afirmar la inexistencia de intentos para garantizar normativamente el cumplimiento de la Constitución y la ley, sino que la regulación era en todo caso ambigua. La lectura de los códigos de la época nos lleva a la conclusión de que, más allá de un control por infracción a la ley, se trataba de meros juicios políticos en los que el mismo Congreso conocía las causas, nombraba a un fiscal que actuaba como parte acusadora y, mediante un tribunal compuesto por nueve congresistas, denominado «jurado nacional», dictaba resolución declarando en su caso, al empleado inhábil para obtener destinos honoríficos, lucrativos o de confianza.

Esta constitución manda en el Capítulo XVI, de las atribuciones de la Corte Suprema, en artículo 65 inciso 10, señala una atribución que refuerza el planteamiento del control constitucional ejercido por el Poder Legislativo la “Manifestar al Congreso en cada periodo los inconvenientes que las leyes presenten en su aplicación, indicando las mejoras oportunas”. Esta Constitución en el sentido de regulación del control constitución marca una tendencia un poco distante a los avances de las Constituciones que se le antecedieron y de las influencias del derecho procesal constitucional, ya que la misma pierde la eficacia del ejercicio del control constitucional en el Poder Judicial, al no dejarlo establecido y darlo de cierta manera al control legislativo, siguiendo la tendencia política conservadora de la Constitución de Cádiz; de igual forma en cuanto al control constitucional en los casos concretos como se señaló anteriormente en la Constitución del 1848.

8. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1858

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 89.- De las atribuciones de la Corte. Inciso 10.- Manifestar al Congreso la inconveniencia de las leyes, o las dificultades para su aplicación; indicando las reformas de que sean susceptibles.

4. Periodo Constitucional de 1893 a 1939

4.1 Constitución de 1893 (*La Libérrima*)

En 1893 el gobierno conservador de Don Roberto Sacasa se derrumbó; los liberales de León proclamaron la revolución del 11 de Julio; describe Esgueva Gómez (2000, p. 352) “que con la victoria de la Cuesta del Plomo, Managua cayó en poder de los liberales y la guerra terminó con el paseo triunfal del General Zelaya por la calle que recibió posteriormente el nombre de Calle del Triunfo. Sin embargo ambos partidos firmaron un tratado donde dejaron en vigencias amplia garantías y acordaron convocar una Asamblea Constituyente”.

Según García Palacios (2015, p. 89) el nacimiento de la Constitución de 1893 denominada la Libérrima es producto de una revolución liberal que llevó al poder a José Santos Zelaya. Es una Constitución que recoge toda la doctrina liberal imperante de la época, introduce el reconocimiento de una serie de derechos nunca antes recogidos en un texto constitucional nicaragüense, es una Constitución moderna para su época. Sin embargo, ésta Constitución es reformada en 1896 y lamentablemente todos los avances de la teoría constitucional moderna que había incorporado el texto de 1893 se ven disminuidos o eliminados por la reforma.

Para Rosales Arguello (2008, p. 80) la Libérrima de 1893, es donde por primera vez aparece orgánicamente la concepción de un Estado moderno en Nicaragua y marca un hito en nuestro desarrollo constitucional. Para Navarro y Sendin (2010, p. 318)

esta nueva Constitución prohibió una religión estatal, garantizó la libertad de cultos, negó a los clérigos el derecho de servir en la Asamblea Legislativa o como oficiales ejecutivos o jueces, prohibió los conventos y los monasterios, estableció la asamblea unicameral y negó a los extranjeros el derecho de permanecer en el país después de hacer “reclamaciones” injustas. Abolió la pena de muerte, estableció la libertad de trabajo y de imprenta, de profesiones y de impuestos, suprimió los monopolios, estableció el control de las rentas públicas, introdujo el recurso de inconstitucionalidad de las leyes, jurado para juicios civiles, la separación del Estado de la Iglesia, el registro civil de las personas y eliminó la prisión por deudas.

Esta Constitución tiene una característica especial en el constitucionalismo de nuestro país, ya que manda a elaborar la primera ley constitucional que regula la Ley Electoral. Así mismo estableció leyes con rango Constitucional como: Ley de Imprentas, Ley Marcial, Ley Electoral y Ley de Amparo. Por otro lado, establece los principios de legalidad y de supremacía constitucional, en donde los funcionarios se sujetarían a la Ley, en los cuales tienen sus facultades y competencias y que todo margen que se ejecutase al margen de la ley era nulo.

En la opinión de Guevara Solís (2010, p. 506),

la figura del amparo, es un recurso característico del sistema latinoamericano, aparece por primera vez en la Constitución mexicana de 1857, siendo posteriormente asumida por los textos constitucionales promulgados en el continente durante los siglos XIX y XX. Lo cual a mi criterio no cabe duda de la influencia de esta figura en nuestro derecho constitucional, ya que la misma señala la facultad de poder judicial de resolver toda controversia suscitada por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales.

Las competencias para ejercer el control constitucional en la Constitución 1893 se encuentran establecidas en el título décimo tercero que refiere al Poder Judicial; en su artículo 116, numeral 3 que instituía la atribución de “Aplicar las leyes en los casos concretos sometidos a su examen, y negarles su cumplimiento cuando sean contrarias a la Constitución”. Así mismo en numeral 6 del mismo artículo refiere la atribución de “Resolver las reclamaciones que se hagan contra las leyes expedidas por las Municipalidades o Consejos departamentales, cuando fuesen contrarias a la Constitución o a las leyes”.

El artículo 117 establecía que se podría entablar directamente, ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de inconstitucionalidad de una ley se refiera a asuntos no ventilables ante los tribunales de justicia, por toda persona que al serle aplicada en un concreto, sea perjudicada en sus legítimos derechos. La ley reglamentará el uso de este recurso.

Por lo que ésta constitución concede una Ley Especial con rango constitucional que reglamenta la materia como es la Ley de Amparo, dictada en 1894; siendo esta la primera ley que regula la materia específica constitucional en Nicaragua. En ésta se encuentra ante quien se interpone el amparo, los alcances de este y el procedimiento del mismo.

Refiere García Palacios (2016, p. 6)

que la Constitución de 1893 es la primera en establecer la institución del amparo, cuyo desarrollo se materializa a través de la primera Ley de Amparo de 1894 en Nicaragua la regulación del amparo propiamente dicho, ha seguido la suerte de las diferentes Constituciones Políticas que le han dado vida jurídica a partir de su inclusión en el ordenamiento constitucional. En tal sentido, el amparo ha estado presente en la Constitución de 1893 (artículos 28, 29, 116 numerales 3, 6, artículo 117, 155); de 1911 (artículo 25, 123 numerales 5, 9, artículo 124, 159); y de 1939 (artículos 118 y 119, artículo 257 numerales 11, 16, 17, y 18, artículo 344) y resto de constituciones que han estado vigentes (1948, 1950, 1974, 1987). De igual forma, las regulaciones constitucionales han sido desarrolladas mediante Ley de Amparo de 1894, Ley de Amparo de 1912, Ley de

Amparo de 1939, Ley de Amparo de 1950, Ley de Amparo de 1974, Ley de Amparo de 1987 (esta última en vigencia)

El artículo 1 de la Ley de Amparo de 1894 señala que “Hay derecho de intentar el recurso de amparo contra los actos o resoluciones de cualquier autoridad o funcionario que violen la Constitución o las leyes constitutivas o restrinja alguna de las garantías individuales”. Así mismo el artículo 3 de ésta Ley, establecía de manera más amplia las competencias que señalaba la Constitución, al dictar:

Artículo 3.- Corresponde exclusivamente a la Corte Suprema conocer y resolver: 1. Del recurso directo de inconstitucionalidad de las leyes, citando al ser aplicadas en casos concretos, en asuntos no ventilables ante los Tribunales de Justicia, resulte perjudicado alguno en sus legítimos derechos, como sucede en todos aquellos casos en que no hay sujeto contra quién dirigirse actualmente para hacerle reo ó demandado por medio de las acciones que concede el derecho común. 2. De las violaciones cometidas por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República como Jefe Supremo ó Comandante General, por los Secretarios de Estado u por cualquiera de los empleados administrativos ó departamentales. 3. De las violaciones cometidas por las Cortes de Apelaciones, en asuntos que no son contenciosos. 4. De las violaciones cometidas por los Concejos Departamentales y Municipalidades.

Cabe destacar que con la Reforma a la Constitución de la Libérrima el 15 de Octubre de 1896; existe un retroceso en el derecho constitución en nuestro país, debido a que la misma suprime del ordenamiento jurídico nicaragüense el Recurso de Inconstitucionalidad, el Recurso de Exhibición de la persona contra las altas y reclutamientos militares hecho ilegalmente, se restablece la pena de muerte, se suprime la disposición donde se prohíbe la prisión por deudas y suprime el artículo 155 donde señala las leyes constitutivas como la de imprenta, marcial, la de amparo y la electora.

8. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1893

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 116.- Atribuciones de la Corte Suprema. Inciso 3.- Aplicar las leyes en los casos concretos

	<p>sometidos a su examen, y negarles su cumplimiento cuando sean contrarias a la Constitución.</p> <p>Inciso 6.- Resolver las reclamaciones que se hagan contra las leyes expedidas por las Municipalidades o Consejos departamentales, cuando fuesen contrarias a la Constitución o a las leyes.</p> <p>Artículo 117.- Podrá también entablarse directamente, ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de inconstitucionalidad de una ley que se refiera a asuntos no ventilables ante los Tribunales de Justicia, por toda persona que al serle aplicada en un caso concreto, sea perjudicada en sus legítimos derechos. La ley reglamentará el uso de este recurso.</p>
Leyes Constitutivas	Artículo 155.- Son leyes constitutivas: la de imprenta, la marcial, la de amparo y la electoral.

4.2. Constitución 1905

El Presidente en funciones en esa época José Santos Zelaya, no se acomodó a la constitucionalidad de la Constitución de 1893 (La Libérrima) y esto originó una serie de conflictos no sólo con los conservadores, sino también con sus propios correligionarios, hasta el punto que la Asamblea se fraccionó y los diputados occidentales lo destituyeron, acusándolo de haber violado de una manera manifiesta la Constitución de la República. El conflicto desembocó en la guerra de 1896 y una vez concluida, con victoria de los ejércitos de Zelaya, la Asamblea reformó la Libérrima, y la acomodó más a los intereses del ejecutivo. En 1905, otra Asamblea Constituyente promulgó la Constitución, conocida como la Autocrática, cuyo contraste con los principios de la Libérrima puede verse al comparar los artículos cambiados. En sí, el nombre de Autocrática, ya era un indicativo de lo que pensaba quienes así comenzaron a llamarla, nos recuerda Esgueva Gómez (2000, p. 409).

Era una constitución de tipo liberal, no desarrollada socialmente; la cual mantenía la división de poderes y la subordinación de los poderes y funcionarios a las leyes. En los títulos II, IV y V y otros artículos diseminados en la Constitución se reconocieron los

derechos, libertades y garantía, más restringidos que los de las Constitución de 1983.
Castro y Calderón (2007, p. 42)

Pero esta constitución históricamente se ve disminuida su progreso constitucional; comenta García Palacios (2015, p. 89) que los avances de la teoría constitucional moderna que había incorporado el texto de la Constitución de 1893 se ven disminuidos o eliminados por la reforma y termina de sacar el constitucionalismo de la Libérrima.

9. Cuadro Comparativo de la disminución de derechos, libertades y garantías de la Constitución de 1893 con relación a la Constitución de 1905.

Derechos y Libertades	Constitución de 1893	Constitución de 1905
Garantías individuales	Artículo 26.- La Constitución garantiza a los habitantes de la Nación, sean nicaragüenses o extranjeros, la seguridad individual, la libertad, la igualdad y la propiedad.	Artículo 19.- Se garantiza a los habitantes de la Nación, sean nicaragüenses o extranjeros, la libertad, la seguridad individual, la igualdad y la propiedad.
Habeas Corpus	Artículo 28.- La Constitución reconoce la garantía del Habeas Corpus	Artículo 21.-La Constitución reconoce la garantía del Habeas Corpus. En consecuencia, todo habitante tiene derecho al recurso de exhibición de la persona.
Casos Concretos aplicación de la Ley.	Artículo 116 Atribuciones de la Corte Suprema Inciso 3.- Aplicar las leyes en los casos concretos sometidos a su examen, y negarles su cuando sean contrarias a la Constitución.	Artículo 92, inciso 3.- Aplicar las leyes en los casos concretos sometidos a su examen, interpretarlas para el mismo fin, conforme al espíritu de la Constitución, y no aplicarlas cuando sean contrarias a ella, bajo su propia responsabilidad
Recursos	Artículo 155.- Son leyes constitutivas: la de imprenta, la <i>marcial</i> , la de amparo y la electoral	Se suprime esta disposición y la deroga el artículo 121 que textualmente dice: Quedan derogadas la Constitución de

		diez de diciembre de mil ochocientos noventitrés y sus reformas de 15 de Octubre de mil ochocientos noventiséis
--	--	---

Si bien cierto, esta Constitución de 1905 deja el Control Constitucional a la Corte Suprema de Justicia en cual expresa en el artículo 92, numeral 3 dentro de las atribuciones consagradas: “Aplicar las leyes en los casos concretos sometidos a su examen, interpretarlas para el mismo fin, conforme al espíritu de la Constitución, y no aplicarlas cuando sean contrarias a ella, bajo su propia responsabilidad”. Pero como lo refiere García Palacios (2015, p. 89) muy acertadamente hay una disminución de la teoría constitucional moderna ya que las disposiciones que daban origen a las leyes constitutivas quedan derogadas.

10. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1905

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 92.- Atribuciones de la Corte Suprema. Inciso 3.- Aplicar las leyes en los casos concretos sometidos a su examen, interpretarlas para el mismo fin, conforme al espíritu de la Constitución y no aplicarlas cuando sean contrarias a ella, bajo su propia responsabilidad.

4.3. Constitución de 1911 (*Non Nata*)

El general José Santos Zelaya se retiró del poder el 16 de diciembre de 1909, objetando la Nota Knox, y el Congreso eligió como Presidente de Nicaragua a José Madriz, renunciando el 19 de agosto de 1910; el cual fue sustituido por el diputado Jose Dolores Estrada, pero éste traslado su poder a su hermano el general Juan José Estrada, quien obtuvo el apoyo unánime del Congreso y con el reconocimiento de los

Estados Unidos, suscribió los Pactos Dawson el 27 y 30 de octubre de 1910. Estos pactos disponían convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una Constitución que sustituyera a la de 1905, que era de corte liberal y elegir a un presidente y aun vicepresidente por el espacio de dos años.

La Asamblea Constituyente fue el 1 de Enero de 1911 y fue aprobada y firmada por los diputados el 4 de abril de 1911, la cual fue redactada sobre las bases conservadoras de 1858. Esta Constitución estableció una censura contra los ministros, que consistía que el Congreso, con un voto de censura podría obligar al Poder Ejecutivo a separar a cualquier de sus Secretarios de Estados. Esta novedad, agenda al sistema constitucional adoptado, provocó un gran disgusto en el Poder Ejecutivo.

Cada uno de los ministros se dio por aludido y más aún el de la Guerra, General Luis Mena y el de la Gobernación, General José María Moncada, que parecían unidos y tenían todas las armas del país y contaban ya con hombres dispuestos a apoyarlos en sus planes de predominio en el país. Esgueva Gómez (2000, p. 431).

El Ejecutivo exigió a la Asamblea Constituyente suspender esta disposición, los cuales los constituyentes se negaron, y al día siguiente de la firma de la Constitución el Presidente Estrada, con apoyo de los ministros militares y anuencia de la Embajada Americana, se dictó el decreto que disolvía el Congreso, por lo que la Constitución quedo sin promulgar. Siendo esta la tercer Constitución Non Nata de la Historia de Nicaragua.

Esta Constitución establecía que los tribunales y jueces de la República aplicarían de preferencia la Constitución y la Corte Suprema de Justicia tendría las atribuciones de “Aplicar e interpretar las leyes en los casos concretos sometidos a su examen y no aplicarlas cuando sean contrarias a la Constitución”; así mismo resolver las reclamaciones que se hagan contra las disposiciones expedidas por las Municipalidades y demás corporaciones locales administrativas y cuando fueren contrarias a la Constitución y a las leyes. Como también conocer del recurso de amparo de una ley. En el Capítulo XXIV: Leyes Constitutivas expresaba en su artículo 174 que “Son leyes constitutivas: la de Imprenta, la Marcial y la de Amparo”. Indudablemente si se

hubiese publicada la misma tendría un poco más de acercamiento en cuanto a derecho la teoría moderna de derecho constitucional, establecida en la Constitución de 1893.

11. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1911 (Non Nata)

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	<p>Artículo 134. Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:</p> <p>Inciso 3.- Aplicar e interpretar las leyes en los casos concretos sometidos a su examen y no aplicarlas cuando sean contrarias a la Constitución.</p> <p>Inciso 6.- Conocer del recurso de amparo en los casos señalados por la ley.</p>
Habeas Corpus	<p>Artículo 29.- La Constitución reconoce la garantía del <i>Habeas Corpus</i>. En consecuencia, todo habitante tiene derecho al recurso de exhibición de la persona.</p>
Recursos	<p>Artículo 174.- Son leyes constitutivas: la de Imprenta, la Marcial y la de Amparo.</p>

4.4. Constitución 1911

Posteriormente de disolver el Congreso; la otra nueva constituyente repuso a la disuelta. Elaboró la nueva Constitución que se promulgó el 21 diciembre de 1911 siendo presidencia Adolfo Díaz. Refiere Castro y Calderón (2007, p. 45)

el general Luis Mena, aprovechando la influencia que tenía sobre la segunda Constituyente, se hizo nombrar sucesor del Presidente Adolfo Díaz, para el siguiente período, lo que era violatorio a los Pactos Dawson que exigía que el gobierno posterior del protempore debía surgir de elecciones libres. El presidente Adolfo Díaz, solicitó la intervención estadounidense, fue así como los marines desembarcaron el 15 de agosto del 1912 y estas apoyaron a Díaz en la lucha armada contra Mena.

La Constitución Política de la República de Nicaragua de 1911, fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Número 13 del 17 de Enero de 1912; y establece dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia instaurada en el artículo 123 inciso 5 la facultad de “conocer los recursos de revisión y de amparo en los casos señalados por la Ley”. Así mismo señala en su artículo 124 que:

“podrá también entablarse directamente ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de inconstitucionalidad de una ley que se refiera a asuntos no ventilables ante los tribunales de justicia, por toda persona que sea perjudicada en sus derechos, al serle aplicada en un caso concreto”.

Esta constitución, se suprime la disposición de las leyes constitutivas referidas en la Constitución de 1911 (Non Nata); pero da pauta a que en Nicaragua se establezca en el ordenamiento jurídico constitucional la Ley de Amparo de 1912, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 25 del 31 de Enero de 1912. Esta Ley de Amparo es muy similar a la Ley de Amparo de 1894 y establece iguales principios y lineamientos generales. En su artículo 1 señala que:

“El recurso extraordinario de amparo tiene por objetivo mantener la Constitución y las Leyes Constitutivas y hacerlas prevalecer contra leyes o decretos, resoluciones, órdenes o mandatos de cualquiera autoridad o funcionarios que las violen o restrinjan o contra los actos de particulares que violen la garantía de la libertad personal”. El artículo 3 refería que: “Podrá también entablarse directamente el recurso de inconstitucionalidad de una ley que se refiere a asuntos no ventilables ante los tribunales de justicia, por toda persona a quien al serle aplicada en un caso concreto sea perjudicada en sus derechos (Artículo 124)”.

Por lo que en ella se establece un tipo de control constitucional de tipo jurisdiccional.

12. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1911

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 122.- Los Tribunales y Jueces de la República aplicarán de preferencia: 1. -La Constitución y leyes constitutivas. 2.-Las leyes y decretos Legislativos, y

	<p>3.-Los decretos y acuerdos ejecutivos. En ningún caso atenderán a disposiciones o reformas hechas por medio de oficio.</p> <p>Artículo 123 Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia Inciso 6.- Conocer de los recursos de revisión y de amparo en los casos señalados por la ley-</p> <p>Artículo 124.- Podrá también entablarse directamente ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de inconstitucionalidad de una ley que se refiera a asuntos no ventilables ante los tribunales de justicia, por toda persona que sea perjudicada en sus derechos, al serle aplicada en un caso concreto.</p>
Habeas Corpus	Artículo 25. - La Constitución reconoce la garantía del habeas corpus. En consecuencia, todo habitante de la República tiene derecho al recurso de exhibición de la persona.
Leyes Constitutivas	Artículo 174.- Son leyes constitutivas: la de Imprenta, la Marcial y la de Amparo.

5. Periodo Constitucional de 1939 a 1979

5.1. Constitución de 1939

El 8 de diciembre de 1936 en Nicaragua se celebraron elecciones presidenciales, en las cuales ganó Anastasio Somoza García; siendo el vicepresidente Francisco Navarro. El periodo presidencial es de 1937 a 1940.

El 17 de Agosto de 1938 se convocó a una Asamblea Constituyente para que redactara una nueva constitución política que sustituiría a la 1911. La Constituyente se instaló el 15 de diciembre de 1938, y aprobó la nueva Constitución Política el 22 de marzo de 1939, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 68, del 23 de Marzo de 1939. Castro y Calderón (2007, p. 53)

En esta Constitución se aumentó el período presidencial a seis años, y por disposición transitoria autorizó a la Asamblea Constituyente a nombrar Presidente de la República

por un período de ocho años, con esta disposición alargaba su periodo su periodo a 10 años y seis meses.

En la opinión de García Palacios (2016, p. 89)

sí se observa la Constitución anteriormente vigente (1911), rápidamente llamará la atención el salto cualitativo que en materia de derechos da la Constitución de 1939. Esto ha llevado a varios autores sostener que se trata de la primera Constitución en la historia nicaragüense que tiene un contenido social vinculado al tratamiento de derechos de esa naturaleza.

De igual forma menciona Rosales Arguello (2008, p. 81)

que por primera vez desarrollan las garantías sociales e individuales, aparece la función social de la propiedad, seguridad social, gratuidad y obligatoriedad de la educación, derechos laborales; tomando como en cuenta la cláusula social del Tratado de Versalles de 1919.

Es interesante señalar que esta constitución tuvo influencia marcadas en cuando a derecho constitucional de la Constitución mexicana de 1917 en lo referente a la figura del amparo. Carpizo (1982, p. 61) destaca

la Constitución mexicana de 1917 ha tenido influencia a nivel internacional en tres grandes aspectos: a) Juicio de Amparo; b) la legislación laboral, y c) la reforma agraria. Esos aspectos son los que han servido de hipótesis para encontrar esos posibles puntos de influencia en Nicaragua, particularmente, en la Constitución de 1939.

En el artículo 119 de esta Constitución, se establece el control constitucional, el que refiere que toda persona tiene derecho para requerir de amparo a fin de hacer efectivas las garantías que la Constitución y las Leyes Constitutivas establecen, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas por leyes, decretos, resoluciones, órdenes, mandatos o actos de cualquier autoridad, funcionario o agente de éstos.

Así mismo en el artículo 257 de la referida Constitución faculta a la Corte Suprema de Justicia de conocer del Recurso de Inconstitucionalidad de una ley que se refiera a asuntos no ventilables ante los Tribunales de Justicia, si fuere interpuesto por persona perjudicada en sus derechos, al ser aplicada en un caso concreto.

Dicha Constitución señala como leyes de acuerdo a lo que instaura en su Título XIII, Capítulo Único: De las Leyes Constitutivas, artículo 344.

“Son leyes constitutivas: La Ley de Amparo y la Ley Marcial”. Con este mandato constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente dicta una nueva “Ley de Amparo o de Orden Constitucional”, la cual fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 76 del 13 de abril de 1939 que señala en su artículo 1 que el recurso de amparo tiene por objeto resolver toda cuestión que suscite: “1)- Por violación de las garantías constitucionales mediante resoluciones, órdenes, mandatos o acto de cualquier autoridad, funcionario o de sus agentes; 2)- Por inconstitucionalidad de una ley o decreto que se refiere a asuntos no ventilables ante los Tribunales de Justicia, al ser aplicados en caso concreto, a cualquier persona en perjuicio de sus derechos. 3)- Por disposiciones expedidas por Alcaldes, Municipalidades o Corporaciones locales, administrativas, cuando sean contrarias a la Constitución y a las leyes; 4)- Por detención ilegal o amenaza de ella en virtud de orden arbitraria de cualquier autoridad, o por actos de particulares restrictivos de la libertad personal contra cualquier habitante de la República”.

13. Mecanismo de Control Constitución de 1939

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Habeas Corpus	Artículo 118.- El Estado garantiza el derecho de Habeas Corpus: Toda persona ilegalmente detenida o amenazada de serlo en virtud de orden arbitraria, o en su favor cualquier otro habitante de la República podrá interponer verbalmente o por escrito ante Tribunal competente, el recurso de Habeas Corpus a fin de que el aprehensor presente en su caso a la persona detenida, y explique y justifique de inmediato el motivo legal de la detención o amenaza; debiendo estarse a lo que decida el Tribunal.
Control Constitucional	Artículo 119.- Toda persona tiene derecho para requerir amparo a fin de hacer efectiva las garantía que la Constitución y la Leyes Constitutivas establecen, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas por leyes, decretos, resoluciones, órdenes, mandatos o

	actos de cualquier autoridad, funcionario o agentes de éstos.
Leyes Constitutivas	Artículo 344. Son leyes constitutivas: La Ley de Amparo y la Ley Marcial.

5.2. Constitución de 1948

El congreso nombró en mayo de 1947 a Benjamín Lacayo Sacasa Presidente de Nicaragua, el cual convocó a una Constituyente el 3 de agosto de 1947. Pero refiere Esgueva Gómez (2000, p.656) al no ser reconocido ni por los Estados Unidos ni por otro gobierno americano renunció al cargo y sustituido por Víctor Manuel Román y Reyes, el 15 de agosto de 1947, estando en la presidencia el 22 de Enero de 1948, se promulgó la nueva Constitución Política; esta fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 22 de Enero de 1948.

En esta Constitución se establece en el artículo 39 que el juicio de garantías o de amparo se establecía por la ley constitutiva del caso. En el artículo 213 se le otorgaba a la Corte Suprema de Justicia la facultad de conocer de los recursos que se interpongan contra disposiciones expedidas por los encargados de la administración del Distrito Nacional, Alcaldes, Municipalidades o Corporaciones Locales administrativas cuando sean contrarias a la Constitución o las leyes. Así mismo el artículo 217 señala que cuando un juez o tribunal en resolución de última instancia que, conforme la ley, no admita en ninguna forma recurso ante la Corte Suprema de Justicia, declare al fallar en un punto debatido la inaplicabilidad de una ley por estimarla inconstitucional, enviará en consulta su fallo por este punto al Supremo Tribunal de Justicia. De esta forma esta Constitución establece la inconstitucionalidad en casos concretos en base a este artículo. Establece como leyes constitutivas la Ley de Amparo y la Ley Marcial.

Esta Constitución da origen a una nueva Ley de Amparo en Nicaragua, la cual fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 267 del 05 de febrero de 1948. En el artículo 1 refiere:

“El juicio de amparo a que se refieren el Art.39 y los ordinales 11) y 16) del Art.213 Cn. tiene por objeto resolver toda cuestión que se suscite: 1)- Por violación de la Constitutivas mediante resoluciones, mandatos o actos de cualquiera autoridad, funcionario o de sus agentes. 2)- Por inconstitucionalidad de forma o fondo, de una Ley o Decreto. 3)- Por disposiciones expedidas por los encargados de la administración del Distrito Nacional, por Alcaldes, Municipalidades o Corporaciones Locales administrativas, aun cuando contraríen únicamente leyes secundarias que no se refieren a mera tramitación, o que aun siendo de esta clase, su quebrantamiento haya producido indefensión. 4)- Por detención ilegal o amenaza de ella en virtud de orden de cualquiera autoridad. 5)- Por actos de particulares restrictivos de la libertad personal de cualquier habitante de la República. 6)- Por habersele dictado auto, de prisión a un procesado que no esté detenido, y que pretenda librarse de sus efectos por considerar que no existe mérito para dictarlo”.

En esta Ley de Amparo por primera vez se deja establecido el Recurso de Amparo contra leyes y decretos de fondo de una ley o decreto; como la regulación en casos concreto. Aparece por primera vez en la regulación constitucional de forma detallada como procederá.

14. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1948

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Habeas Corpus	Artículo 38.- Toda persona detenida o amenazada de serlo, o en su favor, cualquier otro habitante de la República, podrá interponer verbalmente o por escrito ante Tribunal competente, el recurso de Habeas Corpus de acuerdo con las disposiciones del juicio de garantía o de amparo.
Control Constitucional	Artículo 39.- El juicio de garantías o de amparo será

	<p>establecido por la ley constitutiva del caso.</p> <p>Artículo 217.- Los Tribunales y Jueces de la República aplicarán de preferencia:</p> <p>1.- La Constitución y leyes constitutivas.</p> <p>2.- La leyes y decretos-leyes.</p> <p>3. Los decretos y acuerdos ejecutivos. En ningún caso podrán atender a reformas hechas, ni a resoluciones o disposiciones dadas por el medio de oficio.</p> <p>Cuando un juez o tribunal en resolución de última instancia que, conforme la ley, no admita en ninguna forma recurso ante la Corte Suprema de Justicia, declare al fallar en un punto debatido la inaplicabilidad de una ley por estimarla inconstitucional, enviará en consulta su fallo por este punto al Supremo Tribunal de Justicia</p>
Leyes Constitutivas	<p>Artículo 284. Son leyes constitutivas: La Ley de Amparo y la Ley Marcial.</p>

5.3. Constitución de 1950

El General Emiliano Chamorro, liberado por la amnistía de 1948, celebró otro pacto con el General Anastasio Somoza, que firmaron el 3 de abril de 1950, conocido como “Pacto de los Generales”. Este pacto es la base para la nueva Constitución Política el 1 de noviembre de 1950; publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 235 del 06 de Noviembre de 1950. Castro y Calderón (2007, p. 57).

Refiere Esgueva (2000, p. 714)

Los firmantes acordaron adelantar las elecciones al 21 de mayo de 1950 y quien saliese triunfador debía la presidencia el 1 de mayo de 1951. Aunque la Constitución de 1948 prohibía la elección de un militar en servicio activo para el cargo de presidente de la república, a no ser que hubiese renunciado a su cargo 60 días antes de la elección, esta cláusula fue suprimida en el “Pacto de los Generales”; de esta forma Somoza García tenía las puertas abiertas para ocupar nuevamente la casa presidencial.

Esta Constitución en el artículo 229 establecida en su numeral 16 que era competencia de la Corte Suprema de Justicia, conocer de los recursos que se interpongan contra disposiciones expedidas por los encargados de la administración del Distrito Nacional, Alcaldes, Municipalidades o Corporaciones Locales administrativas cuando sean contrarias a la Constitución o a las leyes. No establece el control constitucional casos concretos como los señalaba el artículo 217 de la Constitución de 1948. Establece en el Título XIV, Capítulo Único en su artículo 323 que son leyes Constitucionales la Ley de Amparo, la Ley Marcial y la Ley Electoral.

Tuvo reformas en los años 1955 y 1959 que no afectaron a lo referente al control constitucional. La reforma parcial a la Constitución del 22 de Mayo de 1962, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 26 de Mayo de 1962, reforma el artículo 229 y deja como atribuciones de la Corte Suprema de Justicia en su numeral 12 la de conocer del Recurso de Amparo. Las Reformas de los años 1964, 1966 y 1971 no tuvieron incidencias en lo referente al control constitucional.

Esta Constitución dio origen a una nueva Ley de Amparo, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 27 del 8 de febrero de 1951; en el artículo 1 referenciaba que

“La presente ley establece los medios legales de ejercer el derecho de amparo, a fin de mantener y restablecer la supremacía de la Constitución Política y Leyes Constitucionales. Conforme a ella se resolverá toda cuestión que se suscite: 1) Por violación de la Constitución o de las leyes Constitucionales, mediante leyes, decretos, resoluciones, órdenes, mandatos o actos de cualquier funcionario, autoridad, corporación pública o agente de los mismos; 2) Por inconstitucionalidad de una Ley o decreto que se refiera a asuntos no ventilables ante los Tribunales de Justicia, al ser aplicados en caso concreto, a cualquier persona, en perjuicio de sus derechos; 3) Por detención o amenaza de ella en virtud de orden de cualquier funcionario o autoridad; 4) Por actos restrictivos de la libertad personal de cualquier habitante de la República realizados por particulares; 5) Por auto de prisión dictado contra quien, no estando detenido, pretenda librarse de sus efecto”.

En esta disposición se elimina el Recurso de Inconstitucionalidad de forma o fondo de una ley o decreto y el Recurso en contra de las disposiciones expedidas por los encargados de la Administración del Distrito Nacional.

15. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1950

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Habeas Corpus	Artículo 41.- Toda persona detenida o amenazada de serlo, o en su favor, cualquier otro habitante de la República, podrá interponer verbalmente o por escrito ante Tribunal competente, el recurso de Habeas Corpus.
Control Constitucional	<p>Artículo 229.- Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:</p> <p>Inciso 16.- Conocer de los recursos que se interpongan contra disposiciones expedidas por los encargados de la administración del Distrito Nacional, Alcaldes, Municipalidades o Corporaciones Locales administrativas cuando sean contrarias a la Constitución o a las leyes</p> <p>Artículo 233.- Los Tribunales y Jueces de la República aplicarán de preferencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- La Constitución y leyes constitutivas. 2.- La leyes y decretos-leyes. 3. Los decretos y acuerdos ejecutivos. <p>En ningún caso podrán atender a reformas hechas, ni a resoluciones o disposiciones dadas por el medio de oficio.</p>
Leyes Constitutivas	Artículo 323. Son leyes constitutivas: La Ley de Amparo, la Ley Marcial y Ley Electoral.

5.4 Constitución de 1974

El 28 de marzo de 1971 se celebra entre liberales y conservadores, en el cual Anastasio Somoza Debayle y Fernando Agüero Rocha acuerdan reformar la Constitución en un plazo de dos años y medio. El 14 de Marzo de 1974 se aprueba la nueva Constitución Política de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 89 del 24 de Abril de 1974, la cual deroga la de 1950.

Esta Constitución abogaba por la reconstrucción de la Patria Centroamericana, como aspiración permanente del pueblo de Nicaragua, insistía en que no había religión oficial, hacía hincapié en el derecho de propiedad, garantizaba la libertad de trabajo, y era éste un derecho y un deber, reconocía los cuatro poderes del estado: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. El presidente era elegido por voto popular y directo por un período de seis años, y sin posible reelección inmediata. Esgueva Gómez (2000, p. 857)

En el artículo 293 le faculta a la Corte Suprema de Justicia en el numeral 4 “Conocer los recursos de amparo, casación, revisión y demás que le señale la ley”. Así mismo en el Título XIV, Capítulo Único, artículo 331, establece como leyes constitucionales: La Ley de Amparo, la Ley Marcial y la Ley Electoral. La Reforma del 13 de Julio de 1978, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 158 del 18 de Julio de 1978 se reformó las Leyes constitucionales de la Ley Marcial, Ley de Amparo y el voto fue regulado en la Ley Electoral.

Esta Constitución dio origen a una nueva Ley de Amparo, la cual fue publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 257 del 11 de Noviembre del 1974; en su artículo 1 establecía que

los medios legales para ejercer el derecho de amparo, a fin de mantener y restablece la supremacía de la Constitución Política y Leyes Constitucionales por: 1) Por violación de la Constitución o de las leyes Constitucionales, mediante acuerdos, resoluciones, órdenes, mandatos o actos de cualquier funcionario, autoridad, corporación pública o agente de los mismos; 2) Por inconstitucionalidad de una Ley, tratado o decreto que se refiera a asuntos no ventilables ante los Tribunales de Justicia, al ser aplicados en caso concreto, a cualquier persona, en perjuicio de sus derechos o cuando causen perjuicio por el solo hecho de su promulgación; 3) Por detención o amenaza de ella en virtud de orden de cualquier funcionario o autoridad; 4) Por actos restrictivos de la libertad personal de cualquier

habitante de la República realizados por particulares; 5) Por auto de prisión dictado contra quien no estando detenido materialmente pretenda librarse de sus efectos.

Para Rosales Arguello (2008, p. 83)

En el Recurso de Inconstitucionalidad se podía proceder en contra de una ley, decreto o tratado. En cuanto a los casos de Improcedencia del amparo, además de las enunciadas en la ley anterior, agregaron dos más: 1) contra los actos relativos a la organización de los Poderes del Estado y el nombramiento y remoción de los funcionarios que gozaban de inmunidad; y 2) contra las resoluciones que admiten recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y las que dice ese mismo Tribunal. Una novedad de esta reforma fue el establecimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual nunca tuvo vida jurídica por no haberse dictado la ley necesaria ni tampoco se integró el Tribunal.

16. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1974

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Habeas Corpus	Artículo 42.- Toda persona detenida o amenazada de serlo, o en su favor, cualquier otro habitante de la República, podrá interponer verbalmente o por escrito ante Tribunal competente, el recurso de Habeas Corpus.
Control Constitucional	Artículo 293.- Facultades de la Corte Suprema de Justicia: 4.- Conocer los recursos de amparo, casación, revisión y demás que le señale la ley.
Leyes Constitutivas	Artículo 331.- Establece como leyes constitucionales: La Ley de Amparo, la Ley Marcial y la Ley Electoral.

6. Periodo Constitucional de 1979 a 2016

El día 19 Julio de 1979, después de una tenaz resistencia llevada a cabo por todas las fuerzas vivas del país, desde la propia burguesía hasta los sectores más populares, la dictadura somocista sucumbió, destaca Esgueva Gómez (2000, p.964).

Triunfando la Revolución Popular Sandinista, asume el poder el Gobierno Revolucionario de Reconstrucción Nacional; a través de una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, la cual dicta el Decreto No. 1 “Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional”, este Estatuto del 20 de Julio de 1979, fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 1 del 22 de Agosto del 1979 y se promulgo el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüense del 21 de agosto este considero como el instrumento jurídico que regula el Estado de Nicaragua y derogo la Constitución Política de 1974. En este periodo no existió Constitución Política en Nicaragua hasta 1987.

Para el triunfo de la Revolución Sandinista desaparece el control de constitucionalidad de las leyes al no regularlo ni en el Estatuto Fundamental de la República, ni en el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses dictados en esa fecha. Guevara Solís (2010, p. 505)

Con respecto a lo señalado difiero un poco en su postura, ya que sí se promulgó una Ley de Amparo que se denominó “Ley de Amparo para la Libertad y Seguridad Personal”, bajo el Decreto No. 232, publicado en La Gaceta No. 6 del 8 de enero de 1980; cuyo objetivo era establecer los medios legales para ejercer el derecho de amparo relativo a la libertad y seguridad de las personas a fin de mantener la vigencia y la efectividad del Estatuto Fundamental del país, dictado por la Junta de Gobierno el día 20 de julio de 1979 y el Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, dictado el 21 de agosto de 1979. Que posteriormente tuvo reformas por el Decreto No. 417, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 122 del 31 de Mayo del 1980 en cual reforma el objeto del Decreto original y dicta la reforma en base a esta nueva disposición establece los medios legales de ejercer el derecho de amparo a fin de mantener la vigencia y efectividad del Estatuto Fundamental de la República y el Estatuto de Derecho de Garantías de los Nicaragüenses; en consecuencia se da este recurso contra toda disposición, acto o resolución y en general contra toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que haya violado o amenace violar esos derecho. Por lo que este decreto mantiene el control

constitucional de los instrumentos jurídicos que en ese momento regían o fungían como cartas magnas.

6.1 Constitución de 1987

La Constitución de 1987, fue promulgada el 9 de Enero de 1987 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 5, del 9 de Enero de 1987. Es la décima Constitución que ha regido nuestro país.

Para Cuarezma Terán y Moreno Castillo (1997, p. 256)

El órgano encargado del control de constitucionalidad en el nuevo ordenamiento nicaragüense es la Corte Suprema de Justicia, a quien corresponde conocer y resolver sobre los recursos de inconstitucionalidad y amparo interpuestos de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley de Amparo, según textualmente consagra el Artículo 163.3 de la Constitucional nacional.

Es meritorio señalar que ésta Constitución establece por primera vez en la historia constitucional de Nicaragua, un título donde establece la supremacía de la Constitución y dedica un Capítulo, el cual refiere al Control Constitucional y deja establecido en el artículo 187 el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano. En el artículo 188 el de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política. Así mismo el siguiente artículo el Recurso de Exhibición Personal en favor de aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o estén en peligro de serlo.

En nuestro sistema constitucional el órgano encargado del control de la constitucionalidad o protección de la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia ya sea a través de la Sala de lo Constitucional o el Pleno de la Corte y, además, los jueces y tribunales. Todo ello en armonía con la Constitución y la Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder judicial.

Pueden verse los artículos 164 incisos 3 y 4; artículos 23-25 de la Ley de Amparo; artículo 5 Ley Orgánica del Poder Judicial. García Palacios (2015, p. 18)

La Ley No. 49 “Ley de Amparo”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 241 del 20 de Diciembre de 1988. Establecía en sus considerandos que

La Constitución Política para garantizar su supremacía estableció en sus artículos 187, 188, 189, 190, los recursos por Inconstitucionalidad, de Amparo y de Exhibición Personal, remitiendo sus regulaciones a la Ley de Amparo y que los Recursos por Inconstitucionalidad, Amparo y Exhibición Personal, tienen como objeto ser el instrumento mediante el cual se ejerza el control del ordenamiento jurídico y de las actuaciones de los funcionarios públicos para mantener y restablecer la supremacía de la Constitución Política.

En su artículo 2 y siguientes establecía que el Recurso por Inconstitucionalidad procede contra toda ley, decreto ley, decreto o reglamento que se oponga a la Constitución Política. El Recurso de Amparo procede en contra de toda disposición, acto o resolución y en general, contra toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política. El Recurso de Exhibición Personal procede en favor de aquellas personas cuya libertad, integridad física y seguridad sean violadas o estén en peligro de serlo por: 1) Cualquier funcionario, autoridad, entidad o institución estatal, autónoma o no. 2) Por actos restrictivos de la libertad personal de cualquier habitante de la República realizado por particulares.

Es meritorio señalar que en esta carta magna se rompe por primera vez en la historia constitucional de Nicaragua la tradición del amparo contra leyes dando lugar al recurso de inconstitucionalidad contra leyes, decretos o reglamentos como un mecanismo directo y abstracto del control de norma.

17. Mecanismo de Control Constitucional. Constitución de 1987

Mecanismo de Control	Artículo Constitucional
Control Constitucional	Artículo 45.- Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de

	<p>serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal o de amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo-</p> <p>Artículo 163.- La Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis Magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años. La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, que estarán conformadas con un número no menor de tres Magistrados cada una, por períodos de dos años y medio, siendo éstas: Constitucional, Civil, Penal y de lo Contencioso- Administrativa y las otras que determine la Ley, cuya organización e integración se acordará entre los mismos Magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia, los Magistrados que integren cada Sala elegirán, por mayoría de votos de entre ellos, a su Presidente por un período de dos años y medio. La Corte Plena conocerá y resolverá los recursos por inconstitucionalidad, los conflictos de competencias y constitucionalidad entre Poderes del Estado y los conflictos de constitucionalidad, entre el gobierno central y los gobiernos municipales y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. La Asamblea Nacional nombrará ocho Conjueces. Estos Conjueces serán llamados a integrar Corte Plena, cualquiera de las Salas o el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, cuando se produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los Magistrados. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley, y eligen entre ellos a su Presidente y Vicepresidente por mayoría de votos para un período de dos años y medio, pudiendo ser reelectos.</p> <p>Artículo 164.- Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>3) Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo con la Ley de Amparo.</p> <p>4) Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad</p>
--	--

	<p>de la ley, interpuestos de conformidad con la Constitución y la Ley de Amparo.</p> <p>Artículo 187.- Se establece el Recurso de Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento 128 que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano.</p> <p>Artículo 188.- Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.</p> <p>Artículo 189.- Se establece el Recurso de Exhibición Personal e n favor de aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o esté n e n peligro de serlo.</p> <p>Artículo 190.- Se establecen también los siguientes recursos y mecanismos de control constitucional:</p> <p>1) El Recurso de Habeas Data como garantía de tutela de datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos, de naturaleza pública o privada, cuya publicidad constituya invasión a la privacidad personal y tenga relevancia con el tratamiento de datos sensibles de las personas en su ámbito íntimo y familiar. El Recurso de Habeas Data procede a favor de toda persona para saber quién, cuándo, con qué fines y en qué circunstancias toma contacto con sus datos personales y su publicidad indebida.</p> <p>2) El conflicto de competencia y constitucionalidad entre los Poderes del Estado. Los representantes de los Poderes del Estado promoverán el conflicto de competencia y constitucionalidad cuando consideren que una ley, decreto o reglamento, acto, resolución o disposición de otro órgano, invade el ámbito de sus competencias privativas</p>
--	--

	<p>constitucionales.</p> <p>3) El control de constitucionalidad en caso concreto como un mecanismo incidental de control. Cuando en un caso sometido al conocimiento de autoridad judicial, ésta considere que una norma de cuya validez depende el fallo es contraria a la Constitución, deberá proceder a declarar su inconstitucionalidad para el caso en concreto.</p> <p>Las partes en el proceso pueden solicitar la inconstitucionalidad de una norma que se esté aplicando al caso. La autoridad judicial deberá pronunciarse sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión.</p> <p>4) Los conflictos de constitucionalidad entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. La Ley de Justicia Constitucional regulará los recursos y mecanismos establecidos en este capítulo.</p>
Supremacía Constitucional	<p>Artículo 182.- La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.</p>
Leyes Constitucionales	<p>Artículo 184.- Son leyes constitucionales: la Ley Electoral, la Ley de Emergencia y la Ley de Justicia Constitucional, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua.</p>

Esta Constitución de 1987, vigente en la actualidad (2015), ha sido reformada en los años de 1990, 1995, 2000, 2004, 2005 y 2014. García Palacios (2015, p. 78). Dentro de las cuales, la que considero más importante en cuanto al avance del constitucionalismo nicaragüense en que la última reforma efectuada en el 2014 manda a que se dicten una Ley de Justicia Constitucional, que sería la que vez primera entraría en nuestro derecho positivo. Me confirma mi postura, como lo que sugería Castro y Calderón (2010, p.484) que esto

vendría a reemplazar, y diríamos a ampliar a la actual Ley de Amparo, debe ser una ley de carácter sustantiva, procedimental y procesal; que prevalezca su condición garantista, y por ello de fácil acceso y uso por la población en general y no materia exclusiva de los estudiosos del derecho. Todo con el objeto del perfeccionamiento del Estado de Derecho y la mejor protección de los derechos constitucionales.

RESULTADO Y APORTES

A través del análisis histórico científico realizado en nuestra legislación constitucional, considerando las influencias del constitucionalismo que ha tenido nuestro país, antes de ser un Estado, Libre, Soberano e Independiente podemos encontrar que el control constitucional, surge en la historia doctrinal del derecho como un garante de las libertades individuales de las personas, al resguardar derechos inherentes al ser humano como es libertad individual y el derecho de imprenta.

Por lo que podemos afirmar que el primer mecanismo de control de la supremacía de la Constitución en nuestro territorio fue a través de un procedimiento de Habeas Corpus como medio para garantizar la libertad individual expresada en la Constitución Bayona y siendo ejercido dicho control por un órgano político como es el Poder Legislativo. De esta línea de salvaguardar derechos y garantías individuales; en el transcurso de la evolución del derecho constitucional se van garantizando otros derechos como es derecho de imprenta que sigue el sentido, del derecho de libre pensamiento y el cual se debe respetar el mismo cuando lo exprese como derecho fundamental la Constitución.

De estos dos concepciones jurídicas de derechos y garantías individuales que buscan garantizar los derechos inherente del ser humano, establecidos en un ley superior a las demás normas, nacen el principio de la supremacía de la Constitución ante otras normas de menor rango, para que ninguna ley de carácter inferior pueda violentar la máxima ley que sustenta el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho. De esta concepción básica es que en el transcurso de nuestra historia constitución va

evolucionando y mejorando los mecanismos de control para garantizar el principio de supremacía constitucional.

La evolución del Control Constitucional se ve en nuestro derecho a inicios del siglo XIX que era ejercido por el mismo órgano que dictaba las leyes, siendo esto un auto control de carácter parlamentario, influencia clara del constitucionalismo conservador europeo que luego da un salto enorme en el ámbito constitucional con la Constitución de 1893 de influencia tendencia liberal, el cual se establece un órgano encargado de velar por el principio de supremacía constitucional de las leyes como es el Poder Judicial y manda a dictar la primera ley de amparo de Nicaragua. Es la primera Constitución que establece el Recurso de Amparo contra las leyes, citando al ser aplicada en casos concretos, lo que marca una evolución importante de lo que es la justicia constitución de nuestro país y no cabe duda de la influencia de la sentencia histórica del Juez Marshall. Es lamentablemente que este avance en nuestro derecho constitucional se vio deslucido por las reformas que tuvo esa constitución en 1896 en el cual se suprime las leyes de rango constitucional.

Posteriormente el control constitucional es recogido en la Constitución de 1905 y marca la tendencia de dejarlo establecido definitivamente como una facultad del poder judicial; como un órgano apolítico garante del resguardo de lo establecido en la norma suprema y el legislador delegada la regulación de la figura a una ley específica como es la Ley Amparo, dando un carácter constitutivas que lo normaran. Cabe destacar que en la materia de regulación del control constitucional las Constituciones como la de 1939 tuvieron marcas influencias en materia del amparo de la Constitución Mexicana de 1917.

De la Constitución de 1939 a la de 1979 en nuestra historia constitucional no tuvo grandes influencias ni cambios trascendentales en cuanto a la figura del control constitucional, siempre se marcó una disposición de ser regulado por leyes específicas como la Ley de Amparo; pero en 1979 con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, hay una cierta de transición de garantías individuales y de normas específicas que salvaguardaban la supremacía de los instrumentos supremos que regían

el orden y la organización política del país hasta el año 1987 en donde se promulga la actual Constitución. La cual contiene una gran inclinación a salvaguardar no tanto derechos y garantías individuales, sino derechos sociales y deja establecido un capítulo que refiere por vez primera a garantizar la supremacía constitucional sobre normas de inferior rango. Es a través de sus reformas posteriores que ha tenido el mayor avance en cuanto al control constitucional de nuestro país al establecer en la reforma del 2014 la primera Ley de Justicia Constitucional, la que derogaría la tendencia de regular la materia de control constitucional por leyes de amparos; dejando establecido una nueva inclinación procedimentalmente más avanzada en cuanto al derecho constitucional nicaragüense.

De lo analizado anteriormente, podemos enfatizar la importancia de mantener mediante un efectivo mecanismo de control constitucional judicial lo establecido en la Constitución, como perfeccionamiento del Estado Social de Derecho, en virtud de mantener la voluntad popular viva a través de actos, disposiciones y leyes que no se antepongan a lo establecido en nuestra Carta Magna. Este mecanismo se perfeccionaría más, al que actualmente rige nuestro país, con una Ley de Justicia Constitucional como manda las últimas reformas constitucionales del 2014; ya se mejoraría procedimentalmente y procesal la condición de garantista del sistema de control constitucional en Nicaragua.

LISTA DE REFERENCIAS

- Andrade, M. (2003). *Sentencia Marbury versus Madison (1803)*. Disponible:
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/4/deryso_2003_4_273-279.pdf
- Álvarez Lejarza, E. (1936). *Ensayo Histórico sobre el Derecho Constitucional Nicaragüense*.
Académica Geografía e Histórica de Nicaragua. Managua.
- Asamblea Nacional (2014). *Texto de la Constitución Política de la República de Nicaragua con sus Reformas Incorporadas*. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 31 del 18 de Febrero del 2014. Nicaragua.
- Asamblea Nacional (2013). *Texto de la Ley No. 49, Ley de Amparo con sus Reformas Incorporadas*. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 61 del 08 de abril del 2013. Nicaragua.
- Asamblea Nacional (2006). *Texto de la No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua*. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 137 del 23 de Julio de 1998. Nicaragua.
- Álvarez Lejarza, E. (1936). *Ensayo Histórico sobre el Derecho Constitucional Nicaragüense*.
Académica Geografía e Histórica de Nicaragua. Managua.
- Carpizo, J. (1982). *La Constitución mexicana de 1917*. Universidad Autónoma de México. México.
- Carbonell, M. (2000). *“Marbury versus Madison: regreso a la leyenda”*. México: IIJ – UNAM
- Cabanellas de Torres, G. (2006). *Diccionario Jurídico Elemental*. Argentina: Editorial Heliasta.

Castro, E. y Calderon, M. (2007). *Derecho Constitucional Nicaragüense*. Managua: Ediciones Calderon – Castro.

Castro, E y Calderon, M. (2010). *La necesidad de una Ley de Justicia Constitucional en Nicaragua*. En Homenaje al Profesor Héctor Fix-Zamudio. Directores Iván Escobar Fornos y Sergio J. Cuarezma Terán. INEJ. Managua.

Cuarezma Terán, S y Moreno Castillo, M. (1997). *La justicia Constitucional en Nicaragua*. Disponible:file:///C:/Users/FedePVG/Downloads/Dialnet-Nicaragua-1976348.pdf

Chamorro Mora, R. (1984). *Las Constituciones Políticas de Nicaragua*. Disponible: <http://repositorio.uca.edu.ni/1792/>

Escobar Fornos, I. (1998). *Manual de Derecho Constitucional*. Managua: Hispamer.

Escobar Fornos, I. (2005). *Introducción al Derecho Procesal Constitucional*. México: Porrúa.

Escobar Fornos, I (2012) *La Constitución de Cádiz, modelo del Constitucionalismo*. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional No. 16 Madrid.

Esgueva Gómez, A (2000). *Las Constituciones Políticas y sus Reformas en la Historia de Nicaragua*. Managua: Editorial IHNCA – UCA.

García Palacios, O. (2011). *El Recurso de Amparo en el Ordenamiento Nicaragüense*. Revista IUS, Vol 5, No 25. Puebla. Disponible: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-214720110001000100

García Palacios, O. (2015). *Manual de Derecho Constitucional*. Managua: Asamblea Nacional.

García Palacios, O. (2016). *La Constitución mexicana de 1917 y su influencia en la Constitución Política de Nicaragua de 1939*. Publicación Pendiente.

García Laguardia, J. (1987). *La Influencia de la Constitución Americana en el Constitucionalismo Centroamericano*. Tres Instituciones. Simposio Constitución y Democracia en el Nuevo Mundo. Bogotá.

Guevara Solís, S. (2010). “*Algunos aspectos del Amparo en Nicaragua*”. En Homenaje al Profesor Héctor Fix-Zamudio. Directores Iván Escobar Fornos y Sergio J. Cuarezma Terán. INEJ. Managua.

Landa Arroyo, C. (2010). *Teoría General y Principios de los Procesos Constitucionales*. Perú: Palestra Editoriales. Disponible:
http://app.vlex.com/#WW/vid/337609394/graphical_version.

Rosales Argüello, F. (2008). *El Constitucionalismo y El Amparo de los Derechos Fundamentales*. A 21 Años de la Constitución Política: Vigencia y Desafíos. Managua: INEJ.

Ruiz Guerrero, M. (1987). *Las fuentes del Derecho en los Orígenes del Constitucionalismo Nicaragüense*: Constitución y Ley. Madrid